

**S E S I Ó N P Ú B L I C A NÚM. 31**  
**O R D I N A R I A**  
**JUEVES 13 DE MARZO DE 2014**

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con cuarenta y cinco minutos del jueves trece de marzo de dos mil catorce, se reunieron en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para celebrar sesión pública ordinaria, los señores Ministros Presidente Juan N. Silva Meza, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alberto Pérez Dayán.

El señor Ministro José Fernando Franco González Salas no asistió a la sesión por estar disfrutando de vacaciones por haber integrado la Comisión de Receso relativa al Segundo Periodo de Sesiones de dos mil trece.

El señor Ministro Presidente Silva Meza abrió la sesión y el secretario general de acuerdos dio cuenta de lo siguiente:

**I. APROBACIÓN DE ACTA**

Se sometió a consideración el proyecto de acta de la sesión pública ordinaria número treinta, celebrada el martes once de marzo de dos mil catorce.

Por unanimidad de diez votos el Tribunal Pleno aprobó dicho proyecto.

## II. VISTA Y RESOLUCIÓN DE ASUNTOS

Asuntos de la Lista Oficial para la Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el jueves trece de marzo de dos mil catorce:

### I. 84/2012

Incidente de inejecución de sentencia 84/2012, respecto de la dictada el veintinueve de agosto de dos mil siete por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla, en el juicio de amparo 637/2007, promovido por \*\*\*\*\*. En el proyecto formulado por el señor Ministro Sergio A. Valls Hernández se propuso: *“PRIMERO. Es fundado el incidente de inejecución de sentencia a que este toca se refiere. SEGUNDO. Se consigna a los anteriores titulares del municipio de Tepeojuma, Puebla: 1. \*\*\*\*\*, quien ocupaba el cargo de Tesorero del Municipio de Tepeojuma, Puebla; y 2. \*\*\*\*\*, quien ocupaba el cargo de Presidente Municipal de Tepeojuma, Puebla, directamente ante el Juez de Distrito en el Estado de Puebla, en turno, por haber incumplido la sentencia interlocutoria dictada por la Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla, en el incidente de cumplimiento sustituto derivado del juicio de amparo número 637/2007, en los términos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que sean juzgados y sancionados por la desobediencia cometida, en los términos previstos por el artículo 208 de la anterior Ley de Amparo. TERCERO. Para los efectos mencionados en la parte final del considerando cuarto de*

*esta resolución, déjese el presente incidente de inejecución de sentencia abierto y requiérase a las autoridades ahí señaladas el cumplimiento al fallo sustituto en los términos especificados.”*

Asimismo, informó que, en respuesta a la solicitud realizada por la Secretaría General de Acuerdos en términos de lo acordado por el Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el catorce de enero de dos mil once, se recibió vía fax y correo electrónico copia del oficio 14177 de la secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla, en el que transcribe el acuerdo de doce de marzo de dos mil catorce, en donde la titular de ese órgano jurisdiccional requiere a la autoridad responsable, Síndico Municipal de Tepeojuma, Puebla, para que en el plazo de tres días legalmente computado informe a dicho juzgado de las medidas que ha tomado hasta el momento a efecto de dar cabal cumplimiento al fallo protector de garantías, esto es, que haga entrega al quejoso de la cantidad de once millones trescientos dos mil ochocientos cincuenta pesos con ochenta y ocho centavos, moneda nacional, actualizada al mes de octubre de dos mil diez, como concepto de la cuantía de la restitución en cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo que le corresponde por la superficie del terreno afectado por el acto reclamado, además de que, a la presente fecha, no se ha dictado proveído alguno en el que se tenga por cumplida la sentencia dictada en el juicio principal del que deriva el expedientillo en que se actúa.

El señor Ministro ponente Valls Hernández refirió a los antecedentes del asunto: por decreto expropiatorio de veintiséis de octubre de dos mil cinco, emitido por el Ayuntamiento del Municipio de Tepeojuma, Puebla, se expropió al quejoso el predio denominado “El guamúchil”, ubicado en ese municipio, con una superficie de veinte mil ciento dieciséis metros, sesenta y cinco centímetros cuadrados, del que tomó posesión dicho ayuntamiento mediante acta de dos de diciembre de dos mil cinco; en contra de dicho decreto, el quejoso interpuso recurso de revocación que se declaró infundado; el veinticuatro de mayo de dos mil siete, se promovió juicio de amparo en el que reclamó la Ley de Expropiación para el Estado de Puebla, de treinta y uno de octubre de mil novecientos setenta y cinco, y como acto de aplicación la resolución de quince de mayo de dos mil siete, dictada en el recurso de revocación mencionado, así como la ejecución del decreto expropiatorio y la cancelación de su inscripción; la Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla, en el juicio de amparo 637/2007, concedió el amparo por cuanto a la ley reclamada, su aplicación, y sus actos de ejecución; las autoridades responsables interpusieron recurso de revisión del que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, el que desechó, por un lado, el interpuesto por las autoridades municipales de Tepeojuma, Puebla, y confirmó la concesión por cuanto al que interpuso el Gobernador de Puebla.

En cumplimiento del amparo, el Gobernador del Estado dejó insubsistente la resolución reclamada y dictó una nueva en la que revocó el decreto expropiatorio, en tanto que el Registro Público de la Propiedad de Izúcar de Matamoros, Puebla canceló la inscripción de la expropiación del predio, quedando pendiente el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades del Municipio de Tepeojuma, Puebla, por cuanto a la restitución del inmueble. Indicó que obra en autos la diligencia de diez de octubre de dos mil ocho, en la que aparece que el quejoso no aceptó la posesión del predio en cuestión porque en su concepto “en el inmueble se aprecia la construcción de obra pública” consistente en canchas deportivas, las cuales son de uso común para los pobladores de esta comunidad.

Señaló que, por tal motivo, el veintiuno de octubre de dos mil ocho, el peticionario del amparo solicitó el cumplimiento sustituto, por lo que la juez federal tramitó el incidente respectivo en el que, con fecha seis de agosto de dos mil nueve, se dictó interlocutoria en la que lo declaró infundado y ordenó la restitución del predio; mediante proveído del tres de mayo de dos mil diez, la juez federal requirió el cumplimiento de la sentencia de amparo a las autoridades responsables del municipio citado, a fin de que se llevara a cabo la restitución de la posesión material y jurídica al quejoso.

En atención a lo manifestado por el Síndico Municipal de Tepeojuma, Puebla, en el sentido de que la ejecución de

la sentencia dictada en el juicio de amparo afectaría de manera grave a la sociedad de ese municipio, así como a su estabilidad o interés común, pidió que diera vista a la parte quejosa a efecto de que optara por el cumplimiento sustituto de la sentencia, lo que se obsequió por la juez de amparo. Así, mediante escrito presentado el dieciocho de agosto de dos mil diez, el quejoso, con fundamento en el artículo 105 de la Ley de Amparo vigente entonces, promovió el cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo; la juez de distrito, el veintiuno de diciembre de dos mil diez, dictó interlocutoria en la que declaró procedente el incidente de cumplimiento sustituto y ordenó la entrega al quejoso de la cantidad de once millones trescientos dos mil ochocientos cincuenta y dos pesos con ochenta y ocho centavos, moneda nacional, interlocutoria que quedó firme.

Agotado el procedimiento de ejecución, se remitieron los autos a este máximo Tribunal, el que por proveído de dieciocho de abril de dos mil trece, previo dictamen del Ministro ponente, se ordenó requerir al Tesorero del Municipio de Tepeojuma, Puebla, para que dentro del plazo de diez días hábiles acreditara haber acatado el fallo protector. Así, no obstante que el procedimiento para el cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo se agotó adecuadamente, prevalece la contumacia de las autoridades municipales, tomando en consideración que, de la normatividad que rige las atribuciones de las autoridades municipales de Tepeojuma, Puebla, corresponde en el caso

concreto el cumplimiento referido al anterior Presidente y al anterior Tesorero de dicho municipio.

Por lo anterior, precisó que el proyecto propone consignarlos ante el juez de distrito en el Estado de Puebla, en turno, por el incumplimiento de la sentencia de amparo. Cabe destacar, como hecho notorio, que de la página web del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se advierte que en Puebla, el diecisiete de julio de dos mil trece, hubo elecciones en que se eligieron a los representantes de los doscientos diecisiete Municipios, entre ellos, por supuesto, el de Tepeojuma, Puebla, en la inteligencia de que la toma de posesión se realizó el quince de febrero de este dos mil catorce, de ahí que los anteriores titulares responsables de la administración pública municipal, \*\*\*\*\* y \*\*\*\*\* , ya no ocupan los cargos de Presidente y Tesorero Municipal, respectivamente; por tal motivo, únicamente se propone se consigne a estas dos personas y se solicite el cumplimiento a los servidores públicos que actualmente ocupan dichos cargos desde el quince de febrero de este año.

Finalmente, informó que el once de marzo del año en curso se recibió el oficio del Síndico Municipal, en el que hace del conocimiento que en sesión extraordinaria de cabildo del veintinueve de noviembre de dos mil trece, el Ayuntamiento saliente aprobó el presupuesto de egresos del ejercicio dos mil catorce, hasta por treinta y tres millones cuatrocientos setenta y ocho mil setecientos setenta y dos

pesos con ochenta y ocho centavos, en el cual se contempló el adeudo a favor del quejoso, pero éste no fue aprobado por el Congreso del Estado, y por tanto, debe vincularse a éste y al Gobernador, a efecto de dotar las partidas presupuestales correspondientes al referido Municipio.

Al respecto, estimó que con tal información no se acata el cumplimiento sustituto decretado, pues ha sido criterio de este Alto Tribunal que el cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo no está condicionado a que la autoridad responsable gestione y obtenga la partida presupuestal correspondiente, de ahí que quede evidenciado que las anteriores autoridades no efectuaron, en tiempo y forma, las acciones necesarias para cumplir con la sentencia, en tanto las actuales están llevando a cabo actos tendentes a ello, por lo que no es el caso de decretar su destitución.

El señor Ministro Cossío Díaz indicó que en el considerando segundo se señaló que el incidente tiene por objeto que la ejecutoria de amparo se dé por cumplida mediante el pago de daños y perjuicios al quejoso, por lo que no es el caso disponer de oficio el cumplimiento sustituto, respecto de lo cual consideró que la resolución del incidente innominado no vincula a esta Suprema Corte con la determinación de procedencia de cumplimiento sustituto, pues esta facultad se presenta cuando existe afectación social o cuando se estime que es imposible cumplir con una sentencia de amparo.



Indicó no compartir el proyecto cuando establece que la entrega del predio no puede lograrse por circunstancias de hecho por la oposición de los habitantes del poblado, estimando que podría derivar en enfrentamientos con los cuerpos de seguridad estatales y federales, convocados para esa diligencia, resultando evidente la procedencia del incidente de cumplimiento sustituto solicitado por el quejoso y que las autoridades deban entregar el equivalente en dinero al momento de ejecutarse la sentencia, porque no basta la oposición de estas personas para que se determine un criterio de procedencia del cumplimiento sustituto.

Por otra parte, consideró que, respecto de la afirmación del proyecto atinente a que se afectaría gravemente a la sociedad en mayor proporción que los beneficios que pudiera obtener el quejoso al haberse construido un campo deportivo, no resulta compatible con las razones sostenidas en el proyecto, además de que, si es la afectación social la causa que genera el cumplimiento sustituto, ello implica que puede cumplirse en sus términos la ejecutoria de amparo, no por las circunstancias fácticas que se afirman.

Finalmente, tampoco compartió lo sostenido en el considerando tercero del proyecto, referente a la procedencia del incidente de inejecución de sentencia y la imposición de las sanciones, en razón de que, en el caso concreto, las autoridades han demostrado ante el Juez de Distrito y esta Suprema Corte que realizaron las gestiones

necesarias para allegarse de recursos necesarios para el cumplimiento de la sentencia.

Por esas razones, se pronunció en contra del proyecto.

La señora Ministra Luna Ramos se manifestó en contra del proyecto.

Reseñó los antecedentes del asunto en los mismos términos que el señor Ministro ponente Valls Hernández hasta el comienzo de los requerimientos de cumplimiento.

Indicó que el primer requerimiento se efectuó el diez de septiembre de dos mil ocho, señalando que el quejoso no acudió a la diligencia de devolución del predio porque el juez civil del municipio no solicitó el auxilio de la fuerza pública. El diecinueve de septiembre se señaló nueva fecha para la devolución. El diez de octubre el quejoso comparece a la entrega pero se niega a recibirlo porque el predio tiene una obra pública (canchas de futbol, un tanque de agua y gradas en las canchas). El veintidós de octubre la juez ordenó abrir un incidente para acreditar o no si existe imposibilidad material para cumplir la sentencia, dentro del cual el Presidente Municipal se opuso aduciendo que el predio está en las mismas condiciones que se encontraba cuando se emitió el decreto expropiatorio. El seis de agosto de dos mil nueve la juez determinó no existir imposibilidad material ni jurídica para el cumplimiento, aunado a que las obras no impiden la entrega del predio al quejoso, ordenando su devolución. El trece de octubre se efectuó la diligencia

correspondiente, en la cual entre sesenta y ochenta personas impiden la devolución del predio; el Presidente Municipal solicitó el auxilio de la fuerza pública al Secretario de Seguridad Pública del Estado, negándoles el auxilio por no tener los elementos suficientes para enviarlos. El dieciséis de octubre la juez concluye que la sentencia no implicaba la devolución del predio expropiado porque las obras ya estaban efectuadas y dado que el predio estaba en posesión de la autoridad antes de emitirse los actos reclamados. El diez de noviembre emitió una resolución en la cual tiene por cumplida la ejecutoria, pues las autoridades dejaron sin efectos los decretos impugnados a través del oficio mandado al Gobernador y el Registro Público canceló las inscripciones.

En contra de dicha determinación de cumplimiento, las autoridades interpusieron inconformidad, a la cual recayó el número 11/2009. El tribunal colegiado respectivo, el veintidós de abril de dos mil diez, resolvió dicha inconformidad para revocar la determinación de la juez de distrito de cumplimiento de sentencia, estimando que la entrega del predio forma parte del cumplimiento, sin importar que existan construcciones, ya que no acreditan si existía o no posesión del quejoso antes o después de la emisión del decreto expropiatorio.

El tres de mayo de dos mil diez, la juez requiere nuevamente el cumplimiento y fija el tres de agosto para la entrega del predio. El Síndico Municipal presentó un oficio en

el que aseguró que la entrega del predio resultaba complicada porque los vecinos se oponen a ello, solicitando, en todo caso, el auxilio de la fuerza pública, informando que el Gobernador del Estado los auxiliaría únicamente con doce elementos. Se dio vista al quejoso, quien optó por el cumplimiento sustituto. La juez abrió el incidente relativo en términos del artículo 107. Una vez desahogadas las periciales, se dicta resolución en la cual se determinó que el pago por cumplimiento sustituto de la sentencia, daños y perjuicios, asciende a más de once millones de pesos. Las autoridades impugnaron esta determinación, pero fue confirmada por el tribunal colegiado.

Indicó que, de dos mil ocho a febrero de dos mil once, todo lo narrado se realizó bajo una administración municipal, la cual intentó entregar el predio, sin poder lograrlo. En febrero de dos mil once se cambió la integración del ayuntamiento, cuando todavía estaba pendiente de resolución la queja contra el incidente de cumplimiento sustituto de sentencia, la cual se dictó hasta abril de dos mil once, recién entrada en funciones la nueva integración del ayuntamiento.

Precisó que el nuevo ayuntamiento, en julio de dos mil once, solicitó al Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla el dinero para el cumplimiento de la sentencia; tras la negativa, en sesión extraordinaria de cabildo de agosto de dos mil once, manifiestan que no cuentan con los recursos económicos suficientes para

cumplir la sentencia. En otra acta extraordinaria de cabildo de veintinueve de noviembre de dos mil trece, los regidores del ayuntamiento aprobaron por unanimidad el presupuesto de ingresos y egresos para el año siguiente, contemplando la cantidad de once millones destinada para el cumplimiento de la sentencia, sin obtener éxito con esta situación.

Consideró que no procedía el cumplimiento sustituto de la sentencia porque el hecho de que estas personas se opusieran a la entrega del predio no es motivo suficiente para que no se cumpla, pues es una cuestión de orden público y se debe realizar de manera forzosa por lo que, en el caso, se pudo haber solicitado el auxilio hasta de la fuerza pública federal.

Respecto del beneficio colectivo de mantener las canchas y pagar al quejoso la cantidad resultante, señaló que debió haberse efectuado un estudio específico en donde arrojara ese resultado, tomando en cuenta la proporción que guarda este número de las personas que se oponían a la entrega con la población total del municipio.

Por otra parte, estimó que, respecto de la posesión del quejoso antes del decreto expropiatorio, de acuerdo con el artículo 80 de la Ley de Amparo anterior, se deben retrotraer las cosas al estado en que estaban antes de la violación, por lo que, si el quejoso no estaba en posesión antes del acto reclamado, no se podría obligar su devolución, debiendo el quejoso hacer valer las acciones correspondientes para obtener dicha devolución; ello, tomando en cuenta que del

informe justificado de las autoridades responsables se desprende que el quejoso no tenía la posesión del predio cuando promovió el amparo, además que, de las periciales desahogadas en el incidente de inejecución, se demuestra que las construcciones que se encuentran adheridas al precio cuentan entre quince y veinte años de antigüedad, datos que, si bien no determinan el tiempo de la posesión, son indicios que deberían verificarse para determinar esta posesión.

No obstante lo anterior, si no existe prueba suficiente para determinar la posesión, entonces se presume que la tenía y, por tanto, la devolución del predio es necesaria para el cumplimiento de la sentencia.

La señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas se sumó a la posición y consideraciones de la señora Ministra Luna Ramos.

El señor Ministro Pardo Rebolledo manifestó duda acerca de si esta Suprema Corte, en este momento, debería cuestionar la procedencia del cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo.

Recordó que el amparo se concedió contra la Ley de Expropiación para el Estado de Puebla, su aplicación vía el decreto expropiatorio y sus consecuencias legales y materiales. Una vez que se pretendió hacer entrega del inmueble, no fue posible por la oposición de personas presentes en el lugar. El propio quejoso solicitó entonces el

cumplimiento sustituto, determinando el tribunal colegiado que no era procedente, sino que tendría que restituirse el inmueble. Luego, en el trámite de un diverso incidente se llegó a la conclusión contraria, concluyendo un distinto tribunal colegiado en que, dada la oposición de estas personas, debía abrirse el incidente de cumplimiento sustituto, ordenando la práctica de estudios periciales, a partir de los cuales se revela la cantidad de más de once millones de pesos.

Se mostró conforme con el planteamiento de la señora Ministra Luna Ramos atinente a que el actuar de la autoridad responsable ha sido el de tratar de dar cumplimiento a la sentencia de amparo, por lo que no se demuestra una actitud contumaz o rebelde al respecto y, por ende, no procede la imposición de la sanción establecida en el artículo 107, fracción XVI, constitucional.

El señor Ministro Presidente Silva Meza sometió a votación la propuesta del proyecto, respecto de la cual se emitieron siete votos en contra de los señores Ministros Cossío Díaz, Luna Ramos, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Silva Meza. Los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Aguilar Morales y Valls Hernández votaron a favor.

Por tanto, dado el resultado de la votación mayoritaria en contra de la propuesta del proyecto, el Tribunal Pleno determinó desechar el proyecto y returnar el asunto a un

Ministro de la mayoría, conforme al turno que se lleva en la Secretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal, en la inteligencia de que dicho retorno se computará como un turno para efectos estadísticos.

El secretario general de acuerdos dio cuenta con el asunto siguiente:

**II. 1010/2009**

Incidente de inejecución de sentencia 1010/2009, respecto de la dictada el treinta de mayo de dos mil tres por el ahora Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal en el juicio de amparo 601/2003-II promovido por \*\*\*\*\*. En el proyecto formulado por el señor Ministro Luis María Aguilar Morales se propuso: *“PRIMERO. Es fundado el incidente de inejecución de sentencia 1010/2009, a que este toca se refiere. SEGUNDO. Quedan inmediatamente separados de sus cargos las autoridades responsables señaladas en el cuarto considerando, por haber incumplido la sentencia constitucional, dictada por el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el juicio de amparo número 601/2003, en los términos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Consígnese a las personas mencionadas en el punto resolutivo que antecede, directamente ante el Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal en turno, por el desacato a una sentencia de amparo de acuerdo con lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal, a fin de que sean juzgados y*



*sancionados por la desobediencia cometida, en los términos previstos por el artículo 208 de la Ley de Amparo. CUARTO. Requiérase al Tesorero del Gobierno del Distrito Federal, para que en el término señalado en la parte final del último considerando dé cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto 601/2003, en los términos establecidos en la última parte del considerando segundo de esta interlocutoria. QUINTO. Devuélvanse los autos del juicio de amparo indirecto 601/2003, al Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal para los efectos precisados en la parte final del último considerando de este fallo.”*

Asimismo, informó que el once de marzo se recibió, proveniente de la Directora de Servicios al Contribuyente, original del cheque número 77985 por la cantidad de ciento treinta y un mil novecientos quince pesos, correspondiente a la diferencia entre el importe determinado por el juzgado de distrito del conocimiento en la resolución de tres de septiembre de dos mil siete en el incidente innominado y las devoluciones ya efectuadas. Al efecto, la autoridad oficiante solicita que dicho cheque sea resguardado en el seguro de este Alto Tribunal, y que por conducto de éste sea entregado al quejoso, en acatamiento de la sentencia de amparo, la cual pide se tenga declarada por cumplida. También informó que ayer se recibió diverso oficio del Administrador Tributario en San Borja, el cual, a fin de acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo, acompaña copias certificadas de los siguientes documentos: a) oficio de once de marzo de dos

mil catorce, signado por dicho administrador, mediante el cual se le informa al quejoso que el cheque antes referido está a su disposición en la Suprema Corte, b) citatorio de once de marzo de dos mil catorce, mediante el cual se señala el día doce de marzo de dos mil catorce para realizar la notificación y c) acta de notificación de doce de marzo de dos mil catorce.

Del mismo modo, hizo del conocimiento del Tribunal Pleno que ayer se recibió copia de diverso oficio de la Directora de Servicios al Contribuyente, en el cual realiza diversas manifestaciones en el sentido de que se han atendido diversos incidentes de inejecución del índice de este Alto Tribunal, de dos mil once a la fecha.

El señor Ministro ponente Aguilar Morales presentó el proyecto, reseñando como antecedentes que en el juicio de garantías se concedió el amparo para el efecto de devolver al accionante la cantidad pagada en exceso como resultado del cálculo del impuesto predial, sin considerar el factor del 10% previsto en el artículo controvertido (149, fracción II, del Código Financiero del Distrito Federal, vigente para el ejercicio de dos mil dos). Mediante resolución de tres de septiembre de dos mil siete, del incidente innominado tramitado en amparo indirecto, se precisó que los montos que debían reintegrarse a los quejosos ascendían a doscientos treinta y seis mil seiscientos setenta y cinco pesos con cuarenta centavos, por parte de la administración

tributaria de San Borja, cantidad que quedó firme al no ser recurrida.

Recordó que inicialmente se tramitó un primer incidente de inejecución de sentencia, fallado el tres de marzo de dos mil once, para el efecto de que se giraran diversos requerimientos a las autoridades vinculadas al cumplimiento de la sentencia, dejar sin efectos el dictamen del tribunal colegiado mediante el cual se remitieron los autos a esta Suprema Corte y ordenar que quedara abierto el incidente; ello dado que se acreditó la insuficiencia de recursos para cumplir con la sentencia de amparo, vinculándose a las autoridades competentes a realizar las acciones pertinentes y llevar a cabo las adecuaciones presupuestarias necesarias.

A pesar de lo anterior, señaló que el Administrador Tributario de San Borja emitió diversas resoluciones que no refieren a la adecuación presupuestal, sino al monto determinado y reconocido por el Tribunal Pleno, siendo que dicho administrador devolvió una cantidad menor (cincuenta y nueve mil quinientos cincuenta y nueve pesos), según sus cálculos efectuados, respecto de los cuales no los impugnó en su momento oportuno.

Indicó que la Dirección General de Política Presupuestal, vía oficio DGPP/168/2014 de quince de enero de dos mil catorce, informó que no realizaría adecuación alguna, pues para ese ejercicio fiscal ya se había aprobado la suficiencia para devoluciones de ingresos por la cantidad

de sesenta millones de pesos, moneda nacional, mediante decreto de presupuesto de egresos del Distrito Federal, con lo cual se subsana el motivo por el cual se dejó pendiente de discusión el asunto en dos mil once. No obstante, el Administrador Tributario de San Borja insistió, mediante oficio de treinta y uno de enero de dos mil catorce, que el monto es menor y que sólo existía pendiente de cubrir una diferencia de cuarenta y cinco mil ciento noventa pesos con noventa y dos centavos, moneda nacional.

Señaló que dicho administrador insistió, en resolución de catorce de febrero de dos mil catorce, en devolver esa cantidad, por lo que consideró que se configura una contumacia abierta y directa, máxime que la Directora de Servicios al Contribuyente reconoce y ha informado a esta Suprema Corte la posibilidad de devolver al quejoso la cantidad de doscientos treinta y seis mil seiscientos sesenta y cinco pesos con cuarenta y tres centavos, moneda nacional.

Advirtió que se emitió un cheque por esta última cantidad a disposición de la Suprema Corte, no del quejoso, citando el precedente del incidente de inejecución de sentencia 573/2012, en el cual se determinó que, al no existir certeza acerca de su cobro, no se puede dar cumplimiento a la sentencia de amparo.

Finalmente, evidenciada la actitud contumaz del titular de la Administración Tributaria de San Borja, modificó el

proyecto para aplicar la sanción de la fracción XVI del artículo 107 constitucional solamente a esta autoridad.

La señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas se mostró en contra del proyecto porque la Administración Tributaria de San Borja autorizó la devolución de cincuenta y nueve mil quinientos cincuenta y nueve pesos, así como de cuarenta y cinco mil ciento noventa pesos con noventa y dos centavos, correspondiente al pago de intereses y actualizaciones por cinco años, cantidades que se pusieron a disposición del quejoso a través de diversas cuentas por liquidar.

Señaló que, toda vez que el incidente innominado determinó el importe de doscientos treinta y seis mil seiscientos sesenta y cinco pesos con cuarenta y tres centavos, la Administración Tributaria de San Borja, mediante dictamen número 09IP/154TER/04, autorizó la devolución de la diferencia entre esta cantidad y las dos anteriores. En consecuencia, la Dirección de Servicios al Contribuyente autorizó la cuenta por liquidar certificada número 16CO001000600 por la cantidad de ciento treinta y un mil novecientos quince pesos, emitiendo el cheque correspondiente.

Por tanto, sumando las cantidades puestas a disposición por parte de las autoridades responsables a la quejosa, estimó que se ha dado cabal cumplimiento al núcleo esencial del amparo; por lo que sugirió devolver los autos al juez de distrito de la causa a fin de que se pronuncie

al respecto, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del punto sexto del Acuerdo General Plenario 12/2009.

El señor Ministro Presidente Silva Meza decretó un receso a las doce horas con cincuenta y cinco minutos y reanudó la sesión a las trece horas con veinticinco minutos.

La señora Ministra Luna Ramos se posicionó en contra de la propuesta, compartiendo las razones de la señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas.

Recordó que votó en contra del precedente citado por el señor Ministro Aguilar Morales pues consideró que, aun cumpliendo con la ejecutoria, se sancionó a la autoridad por cumplimiento tardío, además de que el presupuesto del artículo 107, fracción XVI, constitucional, es el incumplimiento, no su temporalidad, siendo que, en el caso, ya está cubierta prácticamente la cantidad determinada.

Estimó que no existe contumacia por parte de la autoridad responsable, pues se habían pagado cantidades en diferentes momentos, presentándose ahora un cheque por ciento treinta mil pesos, remanente que estuvo a disposición del quejoso en esta Suprema Corte, por lo que no debería sancionarse a la autoridad y se debería dejar sin materia el presente incidente de inejecución.

El señor Ministro Pérez Dayán expresó su conformidad con el proyecto por guardar congruencia con el incidente de inejecución de sentencia 860/2013, resuelto el diecinueve de

noviembre de dos mil trece, el en cual se determinó que no sólo es suficiente cumplir con la ejecutoria, pues además de punitivo, el incidente es ejemplar, es decir, busca poner en evidencia la conducta evasiva de una autoridad que pretende incumplir una sentencia y, en el caso, la autoridad impuso su opinión acerca de la cantidad a devolver cuando ya había sido determinada.

Puntualizó que la Suprema Corte no pretende gestionar pagos, sino prevenir a las autoridades de que deben cumplir las sentencias y no esperar hasta que el asunto se someta a consideración del Tribunal Pleno, tema que fue debatido en el precedente, concluyéndose que, independientemente de que se cubriera el monto solicitado, si se advirtiera de autos que se recurrió a alguna maniobra tendente a evadir el cumplimiento de una ejecutoria, las consecuencias constitucionales tendrían que aplicarse frente a esa actitud evasiva.

El señor Ministro Pardo Rebolledo, en congruencia con su voto emitido en el precedente del incidente de inejecución de sentencia 860/2013, se manifestó en contra del proyecto porque, de acuerdo con la Ley de Amparo anterior, una vez cumplida la ejecutoria, carece de materia el incidente respectivo, siendo que, en el caso, se exhibió cheque por la cantidad restante tomando en cuenta el monto fijado por el Juez de Distrito, por lo que no se debe imponer la sanción constitucional a la autoridad responsable.

El señor Ministro Valls Hernández indicó, respecto de la conducta omisiva por parte de las autoridades responsables para cumplir con las ejecutorias de amparo, que se presenta desde que incumplen el primer requerimiento una vez que ha causado estado la ejecutoria, siendo evidente en el caso a pesar de los requerimientos tanto del Juzgado de Distrito, del Tribunal Colegiado y de este propio Alto Tribunal.

Señaló que la práctica común es que las autoridades tributarias del Distrito Federal no acudan en tiempo y forma a la tramitación del incidente innominado para hacer valer su derecho en torno a la cuantificación líquida a pagarse, sino que esperan hasta que los autos radiquen en esta Suprema Corte e, incluso, hasta que están listados para su discusión por el Tribunal Pleno para manifestar que los montos deben ser menores, lo que trasgrede las reglas del procedimiento.

Recordó que en el caso concreto se vinculó al Director de Política Presupuestal de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal a efecto de que realizara las adecuaciones presupuestarias para dotarse de recursos suficientes para dar cumplimiento a la sentencia, sin embargo, el Administrador Tributario de San Borja insistió en que, de acuerdo a sus cálculos, no correspondía pagar a la quejosa los montos determinados en sede jurisdiccional, lo cual no realizó en su momento oportuno, máxime que la justificación no fue sustentada en una insuficiencia presupuestaria, por lo que resulta evidente



la conducta omisiva y tendente a retrasar el cumplimiento de la ejecutoria y, por tanto, votaría por el sentido del proyecto.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea se manifestó en contra del proyecto, en congruencia con lo votado en asuntos anteriores con una problemática similar, puesto que se requiere una declaratoria formal previa de incumplimiento antes de sancionar.

El señor Ministro Presidente Silva Meza se mostró en favor del proyecto, de acuerdo al criterio que ha sustentado.

El señor Ministro sometió a votación la propuesta modificada del proyecto, la cual se aprobó por mayoría de seis votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Aguilar Morales, Valls Hernández, Pérez Dayán y Presidente Silva Meza. Los señores Ministros Luna Ramos, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo y Sánchez Cordero de García Villegas votaron en contra.

Por instrucción del señor Ministro Presidente Silva Meza, el secretario general de acuerdos dio lectura a los puntos resolutivos que regirán el asunto, en los siguientes términos:

*PRIMERO. Es fundado el incidente de inejecución de sentencia 1010/2009, a que este toca se refiere. SEGUNDO. Queda inmediatamente separado de su cargo el licenciado \*\*\*\*\* , quien tiene el carácter de Administrador Tributario en San Borja en el Distrito Federal, por haber incumplido la sentencia constitucional, dictada por el Juzgado Sexto de*

*Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el juicio de amparo indirecto 601/2003, en los términos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Consígnese a la persona mencionada en el punto resolutivo que antecede, directamente ante el Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal en turno, por el desacato a una sentencia de amparo de acuerdo con lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal, a fin de que sea juzgado y sancionado por la desobediencia cometida, en los términos previstos por el artículo 208 de la Ley de Amparo. CUARTO. Requiérase al Tesorero del Gobierno del Distrito Federal, para que en el término señalado en el último considerando dé cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto 601/2003, en los términos establecidos en la última parte del considerando segundo de esta interlocutoria. QUINTO. Devuélvanse los autos del juicio de amparo indirecto 601/2003, al Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal para los efectos precisados en la parte final del último considerando de este fallo.*

El señor Ministro Presidente Silva Meza declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados.

Acto continuo, levantó la sesión a las trece horas con cuarenta y cinco minutos, previa convocatoria que emitió a los integrantes del Pleno para acudir a la próxima sesión

pública ordinaria del día martes dieciocho de marzo de dos mil catorce, a la hora de costumbre.

Firman esta acta el señor Ministro Presidente Juan N. Silva Meza y el licenciado Rafael Coello Cetina, secretario general de acuerdos, quien da fe.